



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN SALA UNITARIA DE DECISIÓN

Medellín, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés

Radicado: 05001 31 03 010 2022 00324 01
Proceso: Pertenencia
Decisión: Revoca
Demandante: Diego Restrepo Cardona
Demandado: José Fernando Restrepo Guisao y Juan Guillermo Henao Martínez
Reseña: La configuración de la causal de interrupción del proceso por enfermedad grave del abogado está sometida a la autonomía judicial, dentro de las reglas de la sana crítica de valoración de los elementos de convicción allegados al proceso. El juez puede negar la interrupción ante la existencia de certificado médico, pero debe ofrecer motivación que valore íntegramente el medio probatorio. Esta causal de interrupción del proceso se configura cuando se presenta la enfermedad, no cuando se hace saber al juez.

ASUNTO

Resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra del auto de 18 de julio de 2023 proferido por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín, mediante el cual se terminó el proceso por desistimiento tácito.

ANTECEDENTES

1. Diego Restrepo Cardona promovió demanda de prescripción adquisitiva en contra de José Fernando Restrepo Guisao y Juan Guillermo Henao Martínez, que fue admitida el 10 de octubre de 2022.

El 22 de noviembre de 2022, el juzgado requirió al demandante, so pena de desistimiento tácito, para que cumpliera las carga de notificar el auto admisorio.

El 13 de abril de 2023, el juzgado no aceptó el intento de notificación a la demandada y requirió a la parte para que aportara constancia de recepción del correo electrónico en las cuentas de las personas a notificar.

El 24 de mayo de 2023, el juzgado requirió so pena de terminar el proceso por desistimiento tácito, para que la parte actora diera cumplimiento a lo dispuesto en el auto admisorio y en el auto del 13 de abril de 2023.

El 18 de julio de 2023, el juzgado terminó el proceso por desistimiento tácito, para lo cual consideró que el demandante no cumplió con las cargas impuestas en el auto del 24 de mayo de 2023.

El 24 de agosto de 2023, la apoderada judicial interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, contra el auto anterior, argumentando que el 13 de julio de 2023 inició su hospitalización debido a unas dolencias que presentaba de quince días antes, por fuertes dolores en la columna que le impedían desplazarse o realizar cualquier actividad, a raíz de lo que fue sometida a una cirugía riesgosa pero finalmente exitosa.

El 7 de noviembre de 2023, el juzgado resolvió no reponer la decisión, porque consideró que el término de 30 días para cumplir las cargas procesales que se dio en el auto del 24 de mayo de 2023 había vencido el 11 de julio de 2023, sin que hasta esa fecha se evidenciara actuación alguna tendiente al impulso procesal y sin que la apoderada hubiese informado al juzgado su situación de salud.

CONSIDERACIONES

Marco jurídico

El artículo 317 del Código General del Proceso preceptúa: “El desistimiento tácito se aplicará en los siguientes eventos: 1. Cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por estado...”.

En esta norma se consagra un término que corre fatalmente en contra de aquella parte a la que mediante un auto en el que se define una carga procesal puntual es requerida; sin embargo, este término, como cualquier otro, se encuentra sometido a las reglas de suspensión e interrupción del proceso.

Sobre esta última figura el art. 159 del CGP dispone: “*El proceso o la actuación posterior se interrumpirá: (...) Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del apoderado judicial de alguna de las partes, o por inhabilidad, exclusión o suspensión en el ejercicio de la profesión de abogado*”.

Sobre el adjetivo “grave” señala el DLE: “*Grande, de mucha entidad o importancia. Negocio, enfermedad grave*” y es por el sentido impreciso o, si se quiere, subjetivo de la esta palabra, que la Corte Constitucional en la sentencia T-824 de 2005 señaló que, aun en materia de la toma de decisión de interrupción del proceso, se debe respetar la autonomía e independencia de las autoridades judiciales, dentro de las reglas de la sana crítica de valoración de los elementos de convicción allegados al proceso:

(...) al punto que bien podría un juez no decretar la interrupción del asunto, así medie un certificado que dé cuenta de la

enfermedad grave del apoderado de una de las partes. Pero de ello no se sigue que le esté dado al juez i) incursionar en los hechos penetrando en el campo de la medicina hasta desconocer la gravedad del trastorno a que el médico alude y ii) restar eficacia a los documentos que en sí mismos considerados cumplen las exigencias, previamente establecidas en el ordenamiento

En consecuencia, ante la excusa de enfermedad grave del apoderado como causal que se alega para la interrupción del proceso, se impone al juez que valore los medios de prueba que se le aporten para sustentar la solicitud dentro de las reglas de sana crítica, porque bien podrá no aceptar que se configura la causal, pero la motivación probatoria deberá cumplir con los estándares propios que legitiman la autonomía e independencia judicial.

Caso concreto

En el presente caso se hizo un requerimiento so pena de desistimiento tácito el 24 de mayo de 2023, notificado por estados el 25 de mayo de 2023, por lo que el término de 30 días otorgado para cumplir la carga de notificación a la demandada venció el 11 de julio de 2023.

En consecuencia, la causal de interrupción del proceso se debió dar con anterioridad a la última fecha indicada y, aunque la apoderada demandante presentó una historia médica en la que hay constancia que pasó a hospitalización una vez entró por urgencias el 13 de julio de 2023; no podía el *a quo* simplemente hacer una contrastación de fechas, sino que debía ofrecer una motivación suficiente de cara a la valoración del medio de prueba documental aportado, porque la abogada señaló que la hospitalizaron en esa fecha pero que los síntomas los presentó quince días antes y sobre esto no se pronunció el juez.

En la historia clínica aportada, además de la fecha de ingreso, se consignó que tenía como diagnósticos: “estado confirmado nuevo, compresión medular no especificada”, “perdida anormal de peso”, “lumbago no

especificado”, “otros episodios depresivos”, “trastorno de ansiedad” y que ingresó a urgencias en contexto de:

Se encuentra en urgencias por cuadro de 15 días de evolución de aumento del dolor lumbar, paraplejia transitoria en miembros inferiores, parestesias y episodios de aparente retención urinaria. Además, refiere perder peso progresivamente, no es posible cuantificar el porcentaje en el último año. Al ingreso se solicitó TAC de columna que reporta múltiples lesiones líticas que comprometen el esqueleto axial además de lesión infiltrativa a nivel de T6 y T7 con destrucción de los cuerpos vertebrales y compromiso medular compresivo, el hemograma no se encuentra patológico. Tiene pendiente el reporte de los demás paraclínicos. Paciente con compresión medular por lesión infiltrativa, se requiere caracterizar mejor la lesión y además evaluar compromiso pulmonar o abdominal por lo que se solicitan imágenes de extensión

Ante un diagnóstico como el anterior y el protocolo que siguió el personal médico, resulta posible calificar de grave la enfermedad padecida por la apoderada; y ante la descripción que se hace de esa enfermedad se encuentra soportada la afirmación de que el cuadro patológico se presentó con anterioridad a la fecha de hospitalización.

Nótese que previo a esta “compresión lumbar” diagnóstico nuevo, la paciente presentaba en la historia clínica el diagnóstico relacionado y confirmado: pérdida anormal de peso¹. Así, la historia clínica permite inferir razonadamente que la enfermedad grave padecida por la demandante no se trató de una patología que apareció en su cuerpo el día de la consulta, sino que previamente se presentó un cuadro de evolución de la enfermedad que finalmente la llevó a consultar en la fecha indicada.

Ahora, atendiendo a las reglas de la experiencia y al principio de la buena fe, es factible asumir como cierto el hecho de que estos síntomas graves de la enfermedad comenzaron su aparición quince días antes de la hospitalización;

¹ En el documento Preguntas frecuentes del Ministerio de Salud se define que el diagnostico relacionado “serán todos aquellos que dentro de una misma atención, originen alguna conducta médica, o estén relacionados con el principal, aunque no generen una conducta médica en ese evento de atención”. Véase: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/OT/FAQ-RIPS.pdf>

ello, porque en el momento del ingreso a urgencias esto fue lo que la paciente relató al médico que presentaba quince días antes: aumento del dolor en la espalda asociado a paraplejia de miembros inferiores e hipoestasia. Con esta descripción de la demandante sobre su estado físico, se procedió al manejo médico que llevó a la intervención quirúrgica.

En el mismo sentido, se advierte que, a la paciente, según la historia clínica, se le encontró tumoral infiltrante en t5 y t6, lesión que no se presenta fulminante, sino que tiene su progresión. Se trata de otro argumento para considerar que la enfermedad grave era anterior al 13 de julio de 2023, manifestando sus síntomas mucho antes de esta fecha.

Según lo dicho, la enfermedad grave con síntomas de aumento de dolor en la espalda, parálisis y pérdida de sensibilidad en los pies, la presentaba la paciente antes del 13 de julio de 2023, por lo que se puede concluir que esta patología grave se presentó el 29 de junio de 2023 –quince días antes de la consulta en urgencia y hospitalización -.

Por lo tanto, atendiendo a la literalidad del numeral 2 del art. 159 del CGP que explicita que el proceso se interrumpe cuando se presenta la enfermedad grave, mas no cuándo se hace saber al juez; se entenderá que la causal de interrupción del proceso se dio el 29 de junio de 2023, fecha para la cual aún corría el término de 30 días que se impuso en el auto de requerimiento del 24 de mayo de 2023.

Por último, ante la gravedad de la patología en la que se descubre un tumor que afecta la columna, que compromete la movilidad y sensibilidad en los pies, que se corrige con cirugía riesgosa, resulta un acto inaceptable lo que hizo el *a quo*, de exigirle a una abogada que ponga en conocimiento de un juzgado su situación de salud, cuando la prioridad mental y de atención del paciente estará puesta al ciento por ciento en el restablecimiento de su salud, máxime si se trata de una persona que padece de trastorno de ansiedad.

En consecuencia, se revocará el auto de fecha y origen indicado, porque el término de requerimiento so pena de terminar el proceso por desistimiento, se interrumpió el 29 de junio de 2023, lo que imponía que una vez enterado el juzgado de la existencia de la enfermedad grave, reanudara el proceso.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria de Decisión; **RESUELVE: Revocar** el auto de fecha y origen indicado; y, en su lugar, se ordena continuar con el trámite del proceso, en virtud de lo expuesto en la parte motiva.

Notifíquese y cúmplase



Martín Agudelo Ramírez

Magistrado